

CONDICIONES DE GARANTÍAS Y PROTECCIÓN A DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS Y LÍDERES SOCIALES EN COLOMBIA

Kelly Johana Guarnizo Giraldo¹

RESUMEN

Para las Naciones Unidas “se usa la expresión defensor de los derechos humanos para describir a la persona que, individualmente o junto con otras, se esfuerza en promover o proteger esos derechos.”² Bajo tal argumento, es necesario considerar que la mejor forma de explicar lo que representan los defensores de los derechos humanos en la actualidad es reflexionando y evaluando sus actividades y el contexto donde se desenvuelven. En este sentido, se hace referencia a los defensores de los derechos humanos de un país como Colombia, donde la violencia ha estado presente desde sus orígenes históricos y es un rasgo característico que siempre ha acompañado a la nación. En este territorio los defensores de los derechos humanos se encuentran en constante riesgo al defender y proteger los derechos de la sociedad en un escenario tan hostil que caracteriza al país. Partiendo de lo expuesto, el presente artículo pretende analizar los mecanismos jurídicos para lograr promover las garantías y protección a defensores de derechos humanos y líderes sociales en Colombia, resaltando el contexto de desprotección que presentan los mismos. El estudio se desarrolló bajo el método cuantitativo, un diseño enmarcado dentro de la investigación no experimental y de tipo documental.

Palabras claves:

Defensores, líderes sociales, derechos humanos y protección.

1. Estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre, Seccional Bogotá.

2. Asamblea General de las Naciones Unidas (1948) Resolución 217 A (III), Folleto Informativo N° 2.

CONDITIONS OF GUARANTEES AND PROTECTION OF HUMAN RIGHTS DEFENDERS AND SOCIAL LEADERS IN COLOMBIA

Kelly Johana Guarnizo Giraldo

ABSTRACT

For the United Nations, "the expression human rights defender is used to describe the person who, individually or together with others, strives to promote or protect those rights." ² Under such an argument, it is necessary to consider that the best way to Explaining what human rights advocates represent today is reflecting and evaluating their activities and the context in which they operate. In this sense, reference is made to the human rights defenders of a country like Colombia, where violence has been present since its historical origins and is a characteristic feature that has always accompanied the nation. In this territory human rights defenders are in constant risk to defend and protect the rights of society in a scenario so hostile that characterizes the country. Based on the above, this article aims to analyze the legal mechanisms to promote the guarantees and protection of human rights defenders and social leaders in Colombia, highlighting the situation of lack of protection presented by them. The study was developed under the quantitative method, a design framed within non-experimental research and documentary type.

Key Words: Defenders, social leaders, human rights and protection.

INTRODUCCIÓN

La violencia en Colombia ha sido tan generalizada en estos últimos años que se ha convertido en parte de la idiosincrasia social del país, hoy en día es común observar crímenes como el narcotráfico, violaciones a los derechos humanos (DDHH), atentados, contra periodistas, líderes sindicales, jueces y personalidades políticas, entre otras; que ponen en evidencia las dificultades que posee el Estado a la hora de responder por la seguridad de sus ciudadanos.

Existen diversas investigaciones nacionales e internacionales que exponen estadísticas y análisis detallado de las cuantiosas violaciones a los DDHH cometidas en Colombia por parte de agentes estatales, ejército colombiano o grupos como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los Paramilitares, los cuales han sido calificados como grupos al margen de la ley.

En este sentido, el camino que recorren los defensores y defensoras de derechos humanos y líderes sociales se torna complicado, ya que no cuentan con la protección de las entidades del estado y tanto los representantes del gobierno como

la población en general se ha acostumbrado a la impunidad en los crímenes cometidos contra estas personas, la cual se ha vuelto alarmante y deshonroso para el país.

En este contexto, es necesario mitigar adecuar, legitimar y garantizar la protección nacional e internacional de los defensores de derechos humanos y líderes sociales, ya que los mismos promueven la tolerancia y el respeto a las leyes universales del hombre, partiendo de una función esencial como lo es lograr en el país un clima paz que acabe de una vez por toda la violencia en la cual se encuentra sumergida la población colombiana.

Partiendo de lo anterior, el Estado debe implementar mecanismos que garanticen la vida y la libertad de expresión de estas personalidades, ya que con su labor se pueden lograr transformaciones positivas que encamine al país a un ambiente de cero violencias, donde el respeto de las ideas y la democracia sean el talante que identifique a la población colombiana.

En función al planteamiento anterior es necesario formular las siguientes interrogantes que servirán de base para la investigación:

¿Cuáles son las iniciativas por parte del Estado Colombiano para promover las garantías y protección a defensores de derechos humanos y líderes sociales en Colombia?

¿Cuáles son las incidencias registradas en la violación de los derechos humanos a defensores de derechos humanos y líderes sociales en Colombia?

¿Cuáles son los mecanismos jurídicos para lograr promover las garantías y protección a defensores de derechos humanos y líderes sociales en Colombia?

Objetivo General

Analizar los mecanismos jurídicos para lograr promover las garantías y protección a defensores de derechos humanos y líderes sociales en Colombia.

Objetivos específicos

Identificar las iniciativas por parte del Estado Colombiano para promover las garantías y protección a defensores de derechos humanos y líderes sociales en Colombia

Determinar las incidencias registradas en la violación de los derechos humanos a

defensores de derechos humanos y líderes sociales en Colombia

Develar los mecanismos jurídicos para lograr promover las garantías y protección a defensores de derechos humanos y líderes sociales en Colombia

Claves del marco teórico

La promoción de los DDHH como garantías para lograr la paz, la equidad y el respeto a la dignidad humana aparecen como un soporte teórico que permitirán lograr una sociedad sin violencia. Otro aspecto teórico a consultar está en función a un estudio analítico de las iniciativas por parte del Estado colombiano en materia de promoción del respeto a los derechos humanos a líderes sociales y defensores de derechos humanos. Finalmente se determinaran los mecanismos jurídicos para lograr restablecer los acuerdos de pacificación en Colombia.

METODOLOGIA

El presente estudio se ubica en las Ciencias Fáticas, que según Tamayo (2007), “es la ciencia cuyo objeto de estudio, son hechos tomados de la realidad; las cuales surgen como una respuesta a la búsqueda continua y sistemática de soluciones para las distintas

dificultades con las cuales se enfrenta la humanidad” (p. 19).

Es cuantitativa porque se aplicaran instrumentos de medición y técnicas estadísticas las cuales Hernández, Fernández y Baptista (2010), señalan que “el enfoque cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de comportamientos en una población” (p. 10).

De acuerdo con las características del problema planteado y los objetivos, el estudio, es de tipo analítico en vista de que está más ligado a los fundamentos estadísticos y a la generación de hipótesis sobre un hecho sucedido, o por suceder.

En cuanto al diseño de estudio, se enmarcara dentro de la investigación no experimental de tipo documental; “ya que a través de la revisión del material documental, de manera sistemática, rigurosa y profunda se alcanza el análisis de diferentes fenómenos o a la determinación de las relaciones entre variables” (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 8).

RESULTADOS

Según el Programa Somos Defensores (2018) en su Boletín Trimestral sobre agresiones contra defensores de derechos humanos en Colombia, “entre julio y septiembre del año 2018, 128 personas defensoras de derechos humanos fueron víctimas de algún tipo de agresión que puso en riesgo su vida e integridad y obstaculizó la labor legítima y legal de defensa de los derechos humanos” (p. 1).

En las estadísticas emitidas por dicha organización se reflexiona sobre lo bastante duro que resulta la cantidad de vidas que cuesta la paz en Colombia; el conjunto de asesinatos a defensores y defensoras de derechos humanos que se dan año tras hacen que la situación del país se torne muy álgida y preocupante. En comparación con el año 2017, se observó una progresión en el número de casos registrados, pasando de 114 temas de agresión de 2017 a 128 en 2018; donde la figura del asesinato fue la que evidenció mayor incremento, lo que se traduce en una intensificación de la situación de seguridad para personas defensoras de los derechos humanos en este territorio (Programa Somos Defensores, 2018).

Sin embargo, al analizar el informe Contra las Cuerdas (2016) del programa Somos Defensores se puede evidenciar el incremento desmesurado de asesinatos hacia miembros de grupos sociales, activistas y defensores y defensoras de derechos humanos.

Durante este año se observó una dicotomía política y social bien particular, por un lado se haya un declive histórico de asesinatos y acciones violentas producto del alto al fuego entre las FARC y el Gobierno colombiano, y de manera paralela, se manejan cifras alarmantes del número de defensores asesinados.

Partiendo de lo antes expuesto, el Programa Somos Defensores (2016) en su informe Contra las Cuerdas expone: “Que la paz no nos cueste la vida” (p. 6), esto producto del desconcertante número de asesinatos (125) de líderes sociales y defensores de DDHH surgido durante este periodo.

Tal argumento, genera un panorama mundial bastante desagradable puesto que devela todas las muertes y amenazas que sufren aquellos quienes velan por el cumplimiento y protección de los derechos humanos de la población colombiana.

En este contexto y partiendo de las argumentaciones estadísticas emitidas anteriormente, el relator Michel Forst de la Organización de Naciones Unidas (ONU) (2018) emite un Informe posterior a su visita al país donde plantea que “ser defensor de derechos humanos en Colombia es de alto riesgo... ya que no pueden desempeñar sus labores en un entorno seguro y propicio” (p. 1).

El relator de la ONU en su informe citó las cifras que maneja la Defensoría del Pueblo en Colombia, la cual oficializó argumentado que: “Desde 2016 hasta agosto de este año 2018, habían asesinado a 343 luchadores sociales, por lo que un defensor de los derechos humanos es asesinado cada tres días, y 35.000 han sido desplazados por la fuerza solamente de El Catatumbo, en el Norte de Santander, donde hay una población de 200.000 habitantes” (p. 2).

Bajo esta perspectiva, y en concordancia con los datos emitidos por la ONU y el Programa Somos Defensores se afirma que este fenómeno es el resultado de la ineficiencia del Estado colombiano en propiciar alternativas de seguridad justas y competentes que den respuesta a esta realidad incómoda, donde las bandas delincuenciales y grupos al margen de la ley

como los paramilitares, guerrilleros, entre otros violan a diario los DDHH del ciudadano colombiano y en particular los dedicados a liderar y defender los derechos humanos y la paz.

Por otra parte, respecto al gobierno colombiano existen varios antecedentes que ponen en tela de juicio su accionar frente a dicha problemática; uno de ellos data de septiembre de 2008, Día Nacional de los Derechos Humanos, donde algunos representantes del gobierno en curso se dedicaron a emitir numerosas críticas contra un informe de DDHH que aún no había sido divulgado ni ha salido a la luz pública, generando así interrogantes sobre la manera como el Ministerio de Defensa puntualmente obtiene o extrae la información que manejan las ONG y las organizaciones sociales.

Posteriormente, hicieron circular informaciones entre medios de comunicación en las cuales se asevera que el Informe de la Misión Internacional de Observación revelaba aumento en muertes extrajudiciales en los últimos 18 meses, registrando 535 casos de ejecuciones extrajudiciales directamente atribuibles a la Fuerza Pública (Revista Semana, 2008).

En este orden de ideas, para demostrar la problemática que existe en Colombia en torno al tema de la inseguridad y la impunidad que sufren los líderes sociales y defensores de los DDHH se expone el caso de 3 de los directivos de La Asociación de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES) que fueron víctimas de atentados y fueron calificados por el Programa de Protección de la Unidad de Protección a Víctimas, como un riesgo ordinario, dejándoles en un estado de indefensión absoluta motivo por el cual no recibieron medidas de protección adecuada.

Igualmente, un poco más reciente en el año 2017 se registró el asesinato de Bernardo Cuero Bravo, defensor de Derechos Humanos y líder víctimas del conflicto (AFRODES) en el municipio de Malambo, el cual fue asesinado por dos sicarios que llegaron hasta su vivienda.

Partiendo de los casos asociados a representantes de (AFRODES) se puede evidenciar que el Estado colombiano sigue fallando al realizar la debida protección y tutela de sus bienes jurídicos en este y muchos casos que se presentan a diario en el país

Así mismo, se hace referencia a los acontecimientos ocurridos a los defensores y defensoras de derechos humanos y líderes sociales Viviana Martínez y Carlos Fernández en el 2017 quienes fueron víctimas de un nuevo ataque junto al esquema de seguridad asignado por la Unidad Nacional de Protección.

De acuerdo con la denuncia, recientemente los dos defensores habían participado en una visita internacional, realizada con el propósito de verificar los daños ambientales generados por las operaciones petroleras de la empresa Amerisur, y documentaron casos de abusos de autoridad que desconocen lo alcanzado en el punto cuatro del Acuerdo de paz (Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, 2017)

Dando una amplitud al tema se pueden citar casos en las comunidades de Lesbianas, Gais, Bisexuales y Transexuales (LGTBI), quienes en Colombia “tan solo el año 2015 se registraron 106 asesinatos a líderes esta comunidad y el 95% de los casos se encuentran en la impunidad, sin ningún tipo de investigación profunda ni siquiera de una mera investigación” (Caribe Afirmativo, 2016, p. 2).

Por otra parte, es oportuno mencionar al movimiento político Marcha Patriótica quienes en el 2016 denunciaron que 133 de sus integrantes han sido asesinados, 13 de ellas mujeres, y reportaron 517 amenazas que demuestran la existencia de un plan de exterminio contra esta organización (Revista Semana, 2014). En tal sentido, el incesante irrespeto a los DDHH en Colombia ponen de manifiesto la inoperancia jurídica por parte del Estado, que para la fecha solo tenía en investigación, de acuerdo con la Procuraduría General de la Nación en Colombia, dos de estos casos.

Bajo este escenario, pero en el plano internacional se tiene que ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2017) fue interpuesto el Caso Yarce y otras vs Colombia en donde se obtuvo sentencia el 21 de noviembre de 2017, el caso consiste en “Hechos ocurridos a la señora Rúa y sus familiares, los cuales se vieron obligados a dejar la Comuna 13 en junio de 2002, motivado, a que su nombre estaban en un listado de personas que los paramilitares pretendían asesinar; de allí que presentara una denuncia penal por el desplazamiento, indicando que su casa había sido ocupada por paramilitares y luego destruida”.

Por otra parte, “la señora Rúa solicitó su inscripción en el Registro Único de Desplazados (RUD) desde 2002 hasta el 2010, y en marzo de 2014 se ordenó su inscripción como desplazada donde el Estado le asignó un monto de ayuda humanitaria. Sin embargo, Rúa no ha podido reanudar sus actividades en la JAC, y ella y sus familiares viven actualmente en un municipio cercano a la ciudad de Medellín”.

“En este contexto, otro acontecimientos referentes es el de la señora Ospina y sus familiares, quienes se fueron del sector donde habitan debido a la violencia y persecución y al igual que Rúa se encontraba en un la lista de personas que los paramilitares estaban buscando”.

Bajo esta amenaza, Ospina denunció los hechos en julio de 2003. “La investigación fue suspendida y reabierto en dos oportunidades, hasta que el en junio de 2009 y marzo de 2014 se dictaron dos sentencias condenatorias contra dos integrantes de grupos armados ilegales”.

Así mismo, “Ospina solicitó su inscripción en el RUD, lo que en primer término fue denegado. No obstante luego, en febrero de 2004 se ordenó su inclusión. En agosto de 2004 y julio de 2005 ella, su esposo y una

hija residieron en Uruguay, por ser beneficiarios de un programa de la Iglesia Católica de Salida Temporal de Colombianos. La señora Ospina no ha vuelto al barrio, y vive en otro sector de Medellín”.

“Igualmente, se puede citar el caso de las señoras Naranjo, Mosquera, Yarce y sus familiares, quienes en noviembre de 2002 fueron detenidas sin orden judicial, por rumores de que ellas eran milicianas y que se estaban cambiando de domicilio”.

“Posteriormente quedarían en libertad, luego que el Fiscal interviniente emitiera una resolución señalando la falta de elementos para afirmar que hubieran cometido un delito. Luego de su liberación las tres señoras fueron intimidadas por los grupos paramilitares a causa de las labores comunitarias”.

“Sin embargo, en vista de la situación de riesgo en la cual se encontraban la señora Mosquera y sus familiares dejaron su lugar de residencia. Por su parte, la señora Naranjo luego de recuperar su libertad comenzó a sufrir amenazas de los paramilitares al ser señalada colaboradora de las milicias, por lo que junto con la señora Yarce decidió dejar su zona de residencia”.

“El 2 de octubre de 2004, a partir de información que autoridades habrían obtenido de la señora Yarce, se detuvo a una persona que supuestamente pertenecía a un grupo armado ilegal, quien fue liberada el mismo día. El 6 de octubre de 2004 mientras que ella desayunaba con su hija y la señora Yarce un desconocido le disparó. Ese mismo día se inició una investigación por el homicidio de la señora Yarce, que luego se acumuló a la investigación de amenazas contra ella y las señoras Mosquera y Naranjo. El 9 de enero de 2009 y el 15 de julio de 2010 se emitieron sentencias condenatorias, cada una contra una persona distinta” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2017).

La actividad de los defensores de derechos humanos debe ir completamente de la mano hacia lograr el fin propuesto y acabar con la impunidad, es así como se vela porque todas las normas sobre los derechos humanos su cuidado y protección sean cumplidas y de una u otra forma ejercer presión sobre los estados para promover la realización de una totalidad de esfuerzos que conlleven a cumplir con todas las obligaciones internacionales que el estado en este caso Colombia haya ratificado para la debida protección y garantía que se le debe a los derechos humanos al igual que la protección

y garantía de su población civil y con esto dejar en cero la tasa de impunidad con respecto a constantes violaciones al derecho internacional humanitario y todo lo que este conlleva para el ser humano.

CAPÍTULO I

CONCEPTO DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS

En la actualidad existen diversas concepciones acerca del significado y la importancia de los defensores de derechos humanos; según la Amnistía Internacional España (2019) estos son: “Personas que, a título individual o colectivo, trabajan para hacer realidad los derechos recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en las diversas normas que la desarrollan. Ese compromiso se ha demostrado fundamental para visibilizar situaciones de injusticia social, combatir la impunidad e impulsar los procesos democráticos en todo el mundo” (p. 1).

Bajo esta perspectiva, los defensores y líderes sociales tienen el efectivo deber de suscitar y procurar la defensa y aplicación de los DDHH y las libertades fundamentales por medios pacíficos. (Declaración sobre Defensores de Derechos Humanos de la ONU, artículo 1). Es por ello, que

constantemente afrontan riesgos concretos que atentan su integridad como resultado de la labor que realizan en apoyo de los DDHH.

A nivel mundial los defensores y defensoras “prueban y ponen en evidencia a quienes profanan de su estado y atribuciones. Además desarropan violaciones de DDHH, las someten a la investigación pública, influyen para que los responsables rindan cuentas. Pueden empoderar a particulares y comunidades para que demanden sus derechos básicos. Otras se niegan a aceptar como natural o inamovible cualquier orden político, social o económico que condene a sectores enteros de población a vivir en la miseria, el temor y la indignidad” (OSCE, 2016, p. 9).

En este contexto, la profesión de defensor y/o defensora de derechos humanos siempre se ha catalogado como una labor cada vez más importante, es por ello, que es pertinente recordar que en 1998 fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas la Declaración sobre los defensores de derechos humanos donde se conviene la necesidad de prestar apoyo y garantía a los defensores de los derechos

Así mismo, en la Declaración se expresan algunos deberes puntuales que los Estados y

la responsabilidad de las sociedades civiles en general de respetar la defensa de los DDHH, conjuntamente con el derecho nacional.

Estado del arte

Para el desarrollo de este trabajo se realizó una búsqueda exhaustiva de artículos, publicaciones y trabajos académicos relacionados con la temática *condición de garantías y protección a defensores de derechos humanos y líderes sociales en Colombia*. En dicho arqueo se pudo evidenciar que solo en Colombia existen infinidad de escritos relacionados con el tema, los cuales en su mayoría están enfocados en la paz y los derechos humanos, lo que sirvió de soporte teórico para abordar a profundidad el presente artículo.

En este sentido, se citan algunos trabajos que sirvieron de soporte epistemológico y metodológico en la construcción de la presente investigación.

En un primer momento es pertinente citar el artículo de investigación de Vargas (2018) titulado *La Protección de los Defensores(as) de Derechos Humanos: Un Tema Carente de Integralidad en Colombia*. Este estudio “hace un análisis crítico de la prevención y protección de las y los defensores de

derechos humanos contenida en la legislación colombiana, las funciones y competencias asignadas a cada entidad y las perspectivas que se tienen con la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”.

Además la autora aborda un contexto colmado de circunstancias que permiten exigirle al Gobierno, la articulación de todos los planes y programas en pro de la defensa y prevención de los DDHH, en el marco jurídico, integral y político de la nación.

Por otra parte, se hace énfasis en el trabajo de Pardo (2018) titulado: *Defensores de los Derechos Humanos: La Acción de la Relatoría Especial de Naciones Unidas y el Estudio de la Situación en Colombia*. El estudio se enfoca en la problemática que gira en torno a la defensa de los DDHH, su evolución, implicaciones en el estudio de la Declaración, así como los mecanismos de protección que aseguran su supervivencia.

Además, el trabajo está centrando en la Relatoría Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos en Colombia y la problemática de género que viven las defensoras de derechos humanos. Igualmente, el estudio está

construido esencialmente sobre las bases de informes y registro emitidos por las Naciones Unidas y las ONG dedicadas a respaldar los DDHH en Colombia; así mismo, se apoya en un conjunto de publicaciones que sirvieron de soporte teórico para la estructuración de la investigación.

El aporte de estas investigaciones antes citadas son de vital importancia para el presente artículo, ya que las mismas hacen un análisis expedito de la realidad de los DDHH en Colombia, enfocados primordialmente en la seguridad de los líderes sociales, los defensores y defensoras de los derechos humanos en el país, lo que favoreció a la interpretación de los diferentes contextos donde se violan los DDHH de estas personalidades y la impunidad por parte del Estado que ha sido constante a lo largo del tiempo.

CAPÍTULO II

SITUACION DE LOS DEFENSORES Y DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y LÍDERES SOCIALES. ANALISIS JURISPRUDENCIAL

Es mucho lo que se ha hablado acerca de la vivencia actual de los defensores y defensoras de derechos humanos y líderes

sociales, ya que, la situación es bastante crítica entendiéndose como se dejó claro en acápite anterior que esta profesión debería ser una de las más respetadas por la sociedad ya que es por ellos que la sociedad debería sentirse agradecida y aún más protegida cuando el estado efectivamente falla.

Como primer caso para ser analizado ante la corte interamericana fue interpuesto el caso con sentencia del 27 de noviembre de 2008, es el llamado “Caso Valle Jaramillo y otros vs Colombia; el caso se relacionan con el señor Jesús María Valle Jaramillo, quien era un conocido defensor de DDHH. A partir de 1996 el señor Valle Jaramillo empezó a denunciar las actividades de grupos paramilitares, particularmente en el municipio de Ituango. El 27 de febrero de 1998, dos hombres armados irrumpieron en la oficina del señor Valle Jaramillo en la ciudad de Medellín y le dispararon, lo cual ocasionó su muerte instantánea. Asimismo, en el lugar de los hechos se encontraban la señora Nelly Valle Jaramillo y el señor Carlos Fernando Jaramillo Correa, quienes fueron amarrados y posteriormente amenazados con armas de fuego” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2008).

En consecuencia, a pesar de haberse interpuesto una sucesión de recursos legales, no se ejecutaron mayores investigaciones ni se penaron a los responsables de los hechos. En este caso se estableció que el estado era responsable por la ejecución que se dio de manera extrajudicial en contra del señor Jesús maría valle Jaramillo antecediendo a todo esto cosas tan terribles como la detención ilegal, torturas y otros tratos crueles a los que fue sometido, aduciendo a esto no se dio como era de esperarse la reparación a las víctimas de manera integral y se dio el desplazamiento por parte de la víctima.

Extendiendo el análisis jurisprudencial a la Honorable corte constitucional de Colombia tenemos establecido que en la época en que sucedió el hecho del defensor Valle Jaramillo, la corte en “sentencia de acción de tutela T-590/98 señaló que para la época de los hechos existía un grave riesgo para los defensoras y defensores de derechos humanos en Colombia que eran víctimas de violencia; ya que esta actividad estaba rodeada de innumerables peligros lo cual convertía a los defensores en personas vulnerables de la sociedad por lo que el Estado tenía la obligación de brindar garantía para su protección”.

CONCLUSIONES

Actualmente la situación política, económica, social y cultural por la cual atraviesa Colombia desde el punto de vista de los derechos humanos ha causado un impacto negativo en el ámbito internacional. La defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales del hombre se han visto perturbadas y diezmadas ante la mirada pasiva del Estado colombiano. Los medios de comunicación nacionales e internacionales y las ONG que trabajan en pro de la defensa de los DDHH han dogmatizado la complicidad del Estado directa e indirectamente en algunos casos de violación a los derechos humanos de los líderes sociales y defensores de la causa, bien sea por el desinterés de la persecución de los autores intelectuales, en la fallas de protección a las empresas que fomentan el clima de vulneraciones de derechos humanos, en el caso omiso a las investigaciones asociadas a los DDHH, o en la generación de un ambiente de impunidad en torno al tema.

Respecto al tema trabajado es importante resaltar que el deber más importante de cualquier estado es proteger y garantizar la vida de la sociedad y población que lo conforman, este deber de proteger y

garantizar derechos fundamentales del hombre debe extenderse a las personas que se dedican a ser líderes sociales, defensores y defensoras de los derechos humanos porque son una parte fundamental en la sociedad y hacen su trabajo por el bien común y por sus actividades están en cierto grado de riesgo permanente.

De esta manera concluyendo también que la Comisión interamericana de Derechos Humanos, estableció la importancia que tienen los defensores y defensoras de derechos humanos y líderes sociales a la hora de garantizar su trabajo efectivamente siendo protegidos y sin ser blancos de amenazas bajo ninguna modalidad.

Al país no le basta con las grandes estadísticas negativas que tiene a su nombre y sigue con el pasar del tiempo sin garantizar y proteger a las personas que son tan importantes para la sociedad, es así que al ser esta una profesión que atraviesa fronteras, países y va más allá de cualquier círculo social o cualquier conflicto se debe implementar una política global que permita a estos profesionales de las humanidades garantizarse sus derechos y protección para así continuar garantizando los de la población de todo el mundo.

Como último es importante resaltar que tanto Colombia como el mundo debe hacer hincapié en proteger y en crear verdaderos programas que les permitan a estos profesionales ejercer de una manera adecuada su labor para con la sociedad y poder ejercer ese papel fundamental dentro del estado social de derecho siendo así esto una buena garantía y promoviendo la protección de los derechos humanos poniendo así a Colombia en un buen lugar y aún más un lugar privilegiado ante el mundo.

Amnistía Internacional ha reiterado la necesidad de fortalecer el mecanismo de protección a personas defensoras de los derechos humanos en Colombia para que sea una política integral de Estado y hasta la fecha esta designación sigue siendo una tarea pendiente que los gobernantes de este país deben atacar, las elevadas muertes ocurridas a líderes sociales y defensores de DDHH así lo afirman

REFERENCIAS

Amnistía Internacional España (2019) Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos. www.es.amnesty.org. Madrid - España.

Asamblea General de las Naciones Unidas (1948) Resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948. Folleto informativo N° 2, Carta Internacional de Derechos Humanos (Rev.1).

Caribe Afirmativo (2016) Comunidades LGTBI Defensores Derechos Humanos, Disponible en: <http://caribeafirmativo.lgbt/2017/03/16/tres-lideres-lgbti-los-defensores-dd-hh-fueron-asesinados-2016/>

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (2017) Incidente de seguridad de defensores de DDHH Carlos Fernández y Viviana Martínez. Bogotá, D.C., 18 de marzo 2017. <https://www.justiciaypazcolombia.com/incidente-de-seguridad-de-defensores-de-ddhh-carlos-fernandez-y-viviana-martinez/>

Corte Interamericana de Derechos Humanos (2017). Caso Yarce y Otros Vs Colombia, Disponible en internet en http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_325_esp.pdf Declaración sobre Defensores de Derechos Humanos de la ONU, artículo 1, http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/Declaration/declaration_sp.pdf.

Corte Interamericana de Derechos Humanos (2008), Ficha Técnica: Valle Jaramillo y Otros Vs Colombia, Disponible en internet en http://www.corteidh.or.cr/CF/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=251

Hernández, Fernández y Baptista (2003). *Metodología de la Investigación*. 3ra edición, editorial Mc Graw Hill – México.

Martínez, M. (2004). *Ciencia y Arte en la Metodología Cualitativa*. 2da Edición Editorial Trillas, México.

Organización de Naciones Unidas (ONU) (2018) Informe: ser defensor de derechos humanos en Colombia es de alto riesgo relator Michel Forst, 06 de Diciembre de 2018.

OSCE (2016) Directrices sobre la Protección de los Defensores de los derechos humanos. Publicado por la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la OSCE. Varsovia - Polonia www.osce.org/odihr

Pardo, A. (2018) Defensores de los Derechos Humanos: La Acción de la Relatoría Especial de Naciones Unidas y el Estudio de la Situación en Colombia. Trabajo de grado en Derecho. Universidad de Cantabria.

Programa Somos defensores (2018) Boletín Trimestral Sistema de Información Sobre Agresiones Contra Defensores de Derechos Humanos en Colombia – SIADDHH. Agresiones contra Defensores(as) de Derechos Humanos en Colombia Julio – Septiembre 2018 Bogotá – Colombia. Noviembre de 2018. Pdf.

Programa Somos defensores (2016) Sistema de Información Sobre Agresiones Contra Defensores de DDHH en Colombia SIADDHH. Informe Anual 2016 Contra Las Cuerdas. Bogotá – Colombia.

Revista Semana (2009). Defensores de Derechos Humanos, atacados por Doquier: Disponible en: <http://www.semana.com/nacion/problemas-sociales/articulo/defensores-derechos-humanos-atacados-doquier/105460-3>

Revista Semana (2014). Marcha Patriótica se torna mortal. Disponible en: <https://www.semana.com/nacion/articulo/asesinatos-de-miembros-del-movimiento-marcha-patriotica/371170-3>

Tamayo, M. (2007). El Proceso de la Investigación Científica, México: Limusa, Noriega Editores.

Vargas, A. (2018) La Protección de los Defensores(as) de Derechos Humanos: Un Tema Carente de Integralidad en Colombia. Artículo elaborado como Trabajo de Grado para optar por el título de Abogada. Universidad Católica de Colombia.